



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-610-18

Contraloría General de la República. Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Managua, veinte de julio del año dos mil dieciocho. Las diez de la mañana.

VISTOS, RESULTA

Visto el Informe Técnico, emitido por la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de la Contraloría General de la República, de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, con Referencia: **DGJ-DP-090-(98)-06-2018**, en cumplimiento con el Plan Anual de Verificaciones de Declaraciones Patrimoniales a ejecutarse en el año dos mil dieciocho, aprobado por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República en Sesión Ordinaria Número **Mil Setenta y Tres (1,073)**, de las nueve y treinta minutos de la mañana del día viernes dos de febrero del año dos mil dieciocho y el listado de funcionarios a quienes se les verificaría su declaración patrimonial aprobado en Sesión Ordinaria Número **Mil Setenta y Cuatro (1,074)**, de las nueve y treinta minutos de la mañana del día viernes nueve de febrero del año dos mil dieciocho. El referido Informe fue remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General Jurídica, a efecto de su análisis jurídico para la Determinación de Responsabilidades si el caso lo amerita, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado y la Normativa y Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Refiere el Informe que el proceso administrativo corresponde a la verificación de la Declaración Patrimonial de CESE presentada ante este Órgano Superior de Control y Fiscalización en fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, por la señora **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO**, en su calidad de Ex Intendente de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), proceso administrativo que se llevó a efecto conforme lo establecido por los artículos 9, numeral 23), de la referida Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y, 23 de la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, asimismo sobre la base de lo establecido en la Normativa para la Determinación de Responsabilidades se planteó los siguientes objetivos: **1)** Comprobar si el contenido de la Declaración Patrimonial de **CESE**, presentada por la Ex Servidora **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO**, en su calidad ya indicada, cumplió sustancialmente con las formalidades contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos; y **2)** Determinar inconsistencias emanadas del proceso administrativo de verificación, si las hubiere, las cuales podrían devenir en responsabilidades, a cargo de la Ex Servidora Pública, de conformidad con la Ley de la Materia. El proceso administrativo se sustanció atendiendo los siguientes procedimientos: **A)** Emisión de Resolución Administrativa de las diez de la mañana del día cinco de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Presidente del Consejo Superior de esta Entidad de Control y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, donde delega a la Dirección General Jurídica para que a través de la Dirección de Probidad ejecute el proceso administrativo de verificación patrimonial, y se



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-610-18

comunicara a los interesados el proceso administrativo y demás diligencias. **B)** Elaboración de fichaje o resumen de la Declaración Patrimonial de CESE de la Ex Servidora Pública en mención, que rola en el expediente administrativo; y **C)** Solicitud de información a las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, y Policía Nacional, para que instruyan a las autoridades competentes la remisión de la información. Rolan Circulares Administrativas, dictadas por las Máximas Autoridades, instruyendo a: **1)** Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil. **2)** Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional y **3)** Entidades Financieras siguientes: Banco de América Central (BAC), Banco Lafise (BANCENTRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco de la Producción (BANPRO), Banco FICOHSA, Banco Corporativo, S.A. (BANCORP) y Banco PROCREDIT, por ser estas las Entidades Encargadas del Registro de Bienes Inmuebles y Mercantil, Registro Vehicular y Registro de Cuentas Bancarias, para que atendieran los requerimientos de la Contraloría General de la República. Como resultado de los requerimientos solicitados, se recibió información pertinente. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 54, de la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se respetó la garantía del debido proceso, rola comunicación de fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho, mediante la cual se notificó el inicio de dicho proceso administrativo a la señora **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO**, de cargo ya expresado, a quien se le tuvo como parte y se le indicó que el proceso concluiría con un informe y que en sus conclusiones se reflejarían las inconsistencias que podrían derivar en Responsabilidades Administrativas, Civiles o Presunción de Responsabilidad Penal, lo cual se le haría saber en su oportunidad a efectos que presentara sus respectivas aclaraciones contando con el tiempo y los medios adecuados para el ejercicio de su defensa. Rola cédula de notificación del auto para ejecutar el proceso administrativo del caso que nos ocupa. Recibida la información suministrada por las entidades descritas que al ser constatadas con la Declaración brindada por la Ex Servidora Pública se identificó inconsistencia, la que según información consistió en lo siguiente: **1)** Que en el Banco de América Central (BAC) tiene inscrita a su nombre la Cuenta de Ahorro en Córdoba No. 351487806, con fecha de apertura veintiocho de septiembre del año dos mil seis. **2)** Que en el Banco de la Producción (BANPRO) tiene a nombre de su cónyuge, Róger Antonio Ramírez Guzmán, la Cuenta de Ahorro en Córdoba No. 10020904314337, con fecha de apertura treinta de julio del año dos mil dos; y **3)** Que en el Banco FICHOSA tiene a nombre de su cónyuge, Róger Antonio Ramírez Guzmán, la Tarjeta de Crédito No. 5549420101033378, con fecha de apertura dieciocho de julio del dos mil tres y Tarjeta de Crédito No. 4329500303100767, con fecha de apertura cuatro de abril del dos mil catorce, es decir antes de la fecha de presentación de la declaración patrimonial y no está incorporada en la misma, por lo que en cumplimiento del debido proceso se procedió a solicitar las aclaraciones de la referida inconsistencia a la Ex Funcionaria Pública **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO**, en su calidad ya señalada, notificación que fue recibida el veinticinco de abril del año dos mil dieciocho a las once y treinta minutos de la mañana, a quien se le otorgó un plazo de quince días, previniéndole que de no recibir sus aclaraciones podría devenir en Responsabilidades establecidas en la



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-610-18

Ley Orgánica de esta Entidad Fiscalizadora. En fecha tres de mayo del año dos mil dieciocho, a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana se recibió en esta Entidad Fiscalizadora, comunicación suscrita por la señora **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO** expresando lo siguiente: **1)** Con respecto a la Cuenta de Ahorro en Córdobas No. 351487806 del Banco de América Central fue incorporada con el número de tarjeta. **2)** Con relación a la Cuenta de Ahorro en Córdobas No. 10020904314337 en el Banco de la Producción (BANPRO) a nombre de su cónyuge señor Róger Antonio Ramírez Guzmán, fue incorporada en la declaración con el número de tarjeta, y **3)** En lo concerniente a las tarjetas de crédito Nos. 554920101033378 y 4329500303100767 del banco FICHOSA a nombre de su cónyuge señor Róger Antonio Ramírez Guzmán, admite que efectivamente no fueron incorporadas en su declaración patrimonial. Por lo que habiéndose sustanciado con arreglo a derecho el presente proceso administrativo y no habiendo más procedimientos que realizar, ha llegado el caso de resolver; y

CONSIDERANDO

I

Nuestra Constitución Política en su parte dogmática deja establecida la Organización del Estado, y en el artículo 130 señala la obligatoriedad de todo funcionario del Estado de rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La Ley que regula esta materia, en este caso la Ley No. 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, que en su artículo 1 establece como Objeto de la ley establecer y regular el régimen de probidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, el artículo 6, literal h), de la precitada Ley de Probidad, estatuye que la **Declaración de Probidad**, es el informe que rinde el Servidor Público por ministerio de la Constitución y la presente Ley, ante la Contraloría General de la República acerca de sus bienes, los de su cónyuge, acompañante en unión de hecho estable, hijos o hijas menores de edad que estén bajo su responsabilidad legal. Que asimismo, el artículo 7, literal e), de la ya referida Ley No. 438, impone como deber de los Servidores Públicos presentar la Declaración Patrimonial y cualquier aclaración que de la misma solicite la Contraloría General de la República. Por otro lado, el artículo 12 de la misma Ley de Probidad señala las causales que se consideran como faltas inherentes a la probidad del Servidor Público y entre ellas está no presentar la Declaración Patrimonial en tiempo y forma, faltas que conllevan a la determinación de Responsabilidades, según lo disponen sus artículos 13 y 14 de la ya mencionada Ley. Finalmente, el artículo 21 de la misma Ley señala de forma clara y determinante el detalle de los bienes que integran el patrimonio personal del Servidor Público, su cónyuge, acompañante en unión de hecho estable e hijos que estén bajo su responsabilidad, en este caso, precisa que debe informarse los derechos sobre los bienes inmuebles, muebles, obras de arte, acciones o cuotas de participación en sociedades civiles o mercantiles nacionales y extranjeras, cuentas corrientes o de ahorro, depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, bonos o cualquier otro título que se tenga en Nicaragua o en el extranjero, entre otros deberes.

II



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-610-18

Sentadas las bases jurídicas relativas a la rendición de cuentas del patrimonio del Servidor Público, corresponde examinar el Informe Técnico objeto de la presente Resolución Administrativa y refiere que al obtener la información tanto de los bancos como de los Registros de Propiedad y Vehicular, se cotejó con la Declaración Patrimonial presentada por la señora **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO**, en su calidad de Ex Intendente de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y producto de ello se determinaron inconsistencias, dado que posee: **1)** En el Banco de América Central (BAC) la Cuenta de Ahorro en Córdoba No. 351487806 inscrita a su nombre con fecha de apertura veintiocho de septiembre del año dos mil seis. **2)** En el Banco de la Producción (BANPRO) la Cuenta de Ahorro en Córdoba No. 10020904314337 a nombre de su cónyuge, Róger Antonio Ramírez Guzmán, con fecha de apertura treinta de julio del año dos mil dos; y **3)** En el Banco FICHOSA, tarjetas de crédito Nos. 554920101033378 y 4329500303100767, a nombre de su cónyuge el señor Róger Antonio Ramírez Guzmán con fechas de apertura dieciocho de julio del dos mil tres y cuatro de abril del dos mil catorce, es decir antes de la fecha de presentación de la declaración patrimonial y no están incorporadas en la misma. Ante tales circunstancias y en cumplimiento con la garantía del debido proceso, le fueron debidamente notificadas las inconsistencias durante el proceso administrativo a efectos de presentar las aclaraciones o justificaciones pertinentes en el plazo no mayor de quince días, lo que hizo en tiempo, dado que a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana del día tres de mayo del año dos mil dieciocho, se recibió comunicación, mediante la cual aclaró lo relacionado a la Cuenta de Ahorro en Córdoba No. 351487806 del Banco de América Central (BAC) y la Cuenta de Ahorro en Córdoba No. 10020904314337 a nombre de su cónyuge el señor Róger Antonio Ramírez Guzmán en el Banco de la Producción (BANPRO), que fueron incorporadas con los números de tarjeta y no de las referidas cuentas, pero admite en su Declaración Patrimonial de CESE fueron omitidas las tarjetas de crédito Nos. 554920101033378 y 4329500303100767, a nombre de su cónyuge el señor Róger Antonio Ramírez Guzmán con fechas de apertura dieciocho de julio del dos mil tres y cuatro de abril del dos mil catorce en el Banco FICHOSA. Corresponde ahora analizar la comunicación suscrita por la señora **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO** a efectos de determinar si presta méritos para justificar la omisión de dichas cuentas de ahorro en su declaración patrimonial y en este caso, únicamente se desvanecen las Cuentas de Ahorro en Córdoba Nos. 351487806 del Banco de América Central (BAC) y No. 10020904314337 del Banco de la Producción (BANPRO), pero no desvanece de modo alguno lo relacionado a las tarjetas de crédito Nos. 554920101033378 y 4329500303100767, a nombre de su cónyuge el señor Róger Antonio Ramírez Guzmán con fechas de apertura dieciocho de julio del dos mil tres y cuatro de abril del dos mil catorce en el Banco FICHOSA, es decir antes de que la señora **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO**, rindiera su Declaración Patrimonial de CESE en fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete, por lo que estaba obligada a incorporarlas en dicha Declaración. Conforme lo anterior, la ex funcionaria ha incurrido en falta por no declarar en forma la totalidad de los bienes que posee legalmente, así lo dispone el artículo 12 inciso c), de la Ley No. 438, "Ley de Probidad de los Servidores



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-610-18

Públicos”, por lo que deberá establecerse a su cargo la correspondiente Responsabilidad Administrativa, al omitir, como se dijo, bienes, como son las tarjetas de crédito a nombre de su cónyuge en el Banco FICHOSA, transgrediendo con su omisión el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Que tal incumplimiento, trajo como consecuencia, la violación del artículo 104, numeral 1) de la Ley 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, que dispone que los Directores o Jefes de Unidades Administrativas, tienen como deber y atribución cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, normas y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República o por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De igual manera transgredió el artículo 38, numeral 1) de la Ley No. 476, “Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa”, que establece que los funcionarios y empleados del Servicio Civil de la Carrera Administrativa deben respetar y cumplir con lealtad la Constitución Política, la referida Ley y su Reglamento y otras leyes relativas al ejercicio de la función pública, así como las obligaciones inherentes a su puesto.

POR TANTO:

Con los antecedentes señalados y de conformidad con los artículos 9, numeral 23), 73 y 77 de la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, 4, 13, 14 y 15 de la Ley No 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, los suscritos Miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que la Ley les confiere,

RESUELVEN:

PRIMERO: Se aprueba el Informe Técnico emitido por la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, con Referencia: DGJ-DP-090-(98)-06-2018, derivado del Proceso Administrativo de Verificación de Veracidad de Declaración de CESE del que se ha hecho mérito.

SEGUNDO: Ha lugar a establecer como en efecto se establece, **Responsabilidad Administrativa** a cargo de la señora **BERTA MARÍA MARTÍNEZ CASTILLO**, en su calidad de Ex Intendente de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), por incumplir el ordenamiento Constitucional de los Servidores Públicos artículos 130 de la Constitución Política de la República de Nicaragua; 7, literal e) y 21 de la Ley No. 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”; 104, numeral 1) de la Ley No. 681, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, a como se dejó relacionado en la presente Resolución Administrativa.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RDP-CGR-610-18

TERCERO: Por lo que hace a la **Responsabilidad Administrativa** aquí determinada, este Consejo Superior sobre la base de los artículos 78, 79 y 80 de la precitada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, impone como Sanción Administrativa, la **Multa de Un (1) Mes de salario**, que deberá ejecutarse por el titular de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, la que deberá recaudarse a favor de dicha Entidad Estatal, conforme lo dispuesto en los artículos 83 y 87, numeral 2) de la Ley Orgánica de la Contraloría, según proceda. Del cobro efectivo de la multa, deberá de informarse a esta Autoridad en el plazo de treinta (30) días, como lo dispone el artículo 79 de la referida Ley Orgánica.

CUARTO: Se le previene al afectado del derecho que le asiste de recurrir de revisión ante este Consejo Superior en el término de ley, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la precitada Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

La presente Resolución Administrativa está escrita en seis (06) folios útiles de papel bond con membrete de la Contraloría General de la República, fue votada y aprobada por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria Número Mil Noventa y Seis (1,096) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día veinte de julio del año dos mil dieciocho, por los suscritos Miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. **Cópiese, Notifíquese y Publíquese.**

Lic. Luis Ángel Montenegro E.
Presidente del Consejo Superior

Dra. María José Mejía García
Vicepresidenta del Consejo Superior

Lic. Marisol Castillo Bellido
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Lic. María Dolores Alemán Cardenal
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Miembro Propietario del Consejo Superior

VAML/FJGG/LARJ
C/c. Expediente (25)
Consecutivo
M/López